

CONGRESO NACIONAL  
**CAMARA DE SENADORES**

SESIONES ORDINARIAS DE 2003

**ORDEN DEL DIA N° 361**

**Impreso el día 10 de julio de 2003**

SUMARIO

**COMISION DE JUSTICIA  
Y ASUNTOS PENALES**

**Dictamen** en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. (CD.-26/03.)

**Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (CD.-26/03), creando el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados; y, por las razones que dará el miembro informante y los fundamentos que se acompañan, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 24 de junio de 2003.

*Jorge A. Agúndez. – Jorge P. Busti. –  
Malvina M. Seguí. – Amanda M.  
Isidori. – Carlos A. Prades.*

En disidencia parcial:

*Vilma L. Ibarra. – Diana Conti. – Mi-  
guel A. Pichetto.*



## FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

En el dictamen que ha elaborado esta comisión se aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en revisión (CD-26/03), creando el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, por entender que surge como razonable que dicho programa funcione en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, encomendándose su dirección a un director nacional que designe el ministro responsable del área.

Es de destacar que en las reuniones celebradas en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se debatió la cuestión referente al órgano competente para el manejo del programa, asistiendo a esas reuniones diversos funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Las posturas sustentadas fueron, por un lado, que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados debía funcionar en la órbita de la Procuración General de la Nación, como una forma de acentuar el carácter acusatorio del procedimiento penal a tal efecto se presentó a esta comisión; la posición fundamentada por escrito. Por su parte, de otro lado se argumentaba que el programa funcionará con absoluta eficiencia en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, afirmando el secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, en representación del Ministerio de Justicia, a que “es intención cierta desde el Ministerio una vez que se apruebe este proyecto, hacer un convenio con la Procuración. De manera tal que el programa quede gerenciado o, de alguna forma, manejado por la Procuración General de La Nación, en un convenio con el Ministerio de Justicia”.

Debe destacarse que cuando se trató este proyecto de ley en la Cámara de Diputados la señora diputada Falbo, en su carácter de miembro informante del dictamen de comisión; señaló: “En el artículo 8º se establece el ámbito en el que funcionará este programa, que es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Esto ha sido conversado con las anteriores autoridades del ministerio y con el actual ministro. En cierto modo es una forma de economizar, porque en ese ministerio ya existen di-

versos registros que funcionan perfectamente bien, no requiriéndose un nuevo sistema con nuevos empleados, funcionarios, etcétera...”.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al elevar el proyecto al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo propuso que el programa funcionase en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

En el mensaje de elevación se señaló que el proyecto había sido elaborado en base a las conclusiones de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, creada por decreto 1.651/02 e integrada por destacados especialistas en la materia, y con la participación de los señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge Alfredo Agúndez, miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de esta Cámara.

Por los motivos expuestos, en este dictamen se hacen propios los fundamentos sostenidos en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo.

*Jorge A. Agúndez. – Jorge P. Busti.  
– Malvina M. Seguí. – Carlos A.  
Prades.*

### **Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

(4 de junio de 2003)

#### **PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las leyes 23.737 y 25.241.

Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de vio-



lencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.

Art. 2° – Las medidas de protección serán dispuestas, de oficio o a petición del fiscal, por el juez o tribunal a cargo de la causa en que se recibiera la declaración que justificara tal temperamento. El órgano judicial competente, con carácter previo, deberá recabar:

- a) La opinión del procurador general o del magistrado del Ministerio Público en el que aquél delegue la mencionada función, cuando no hubiese sido requerido por éste;
- b) La conformidad del director nacional de protección a testigos e imputados.

Hasta que ello suceda la situación quedará a cargo del juez o tribunal en los términos del artículo 79, inciso c), del Código Procesal Penal de la Nación.

En el supuesto de peligro en la demora o inconveniencia de que se adopten las medidas señaladas en el párrafo anterior, se deberá producir el ingreso provisorio de la persona al programa y realizar las medidas de protección que correspondan.

Art. 3° – La aplicación del presente programa, a los fines de la adecuada distribución y asignación de los recursos disponibles del Estado nacional, dependerá de la concurrencia de los recaudos siguientes:

- a) Presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal;
- b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social;
- c) Validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente;
- d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección;
- e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.

Art. 4° – Las medidas especiales de protección previstas en esta ley podrán ser aplicadas

a todas o algunas de las personas que convivan con la persona bajo amenaza.

Art. 5° – Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:

- a) La custodia personal o domiciliaria;
- b) El alojamiento temporario en lugares reservados;
- c) El cambio de domicilio;
- d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses;
- e) La asistencia para la gestión de trámites;
- f) La asistencia para la reinserción laboral;
- g) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.

Art. 6° – Es condición inexcusable para la admisión y permanencia del sujeto beneficiario en las previsiones del presente programa la aceptación escrita del cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:

- a) Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas;
- b) Someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan evaluar su capacidad de adaptación a las medidas que fuera necesario adoptar;
- c) Prestar el consentimiento, en caso de ser necesario, para que se realicen las medidas previstas en el inciso anterior, respecto de menores o incapaces que se encuentren bajo su patria potestad, guarda, tutela o curatela;
- d) Presentar una declaración jurada patrimonial sobre su activo, pasivo, juicios o



acciones judiciales pendientes y demás obligaciones legales;

- e) Colaborar con el mantenimiento de las relaciones de filiación entre padres o madres e hijos menores de edad y de las obligaciones alimentarias que pudieran existir;
- f) Mantenerse dentro de límites impuestos por las medidas especiales de protección;
- g) Cambiar de domicilio cada vez que sea necesario y, cuando corresponda, recibir el bien que le haya sido gestionado. En estos casos el presente programa proveerá la gestión de inmuebles a través de los planes habitacionales del Estado, con cargo a la persona beneficiaria;
- h) Abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo o más allá de la capacidad de alcance operativo del personal asignado para la protección;
- i) Respetar los límites impuestos por las medidas especiales de protección y las instrucciones que a tal efecto se le impartan;
- j) Comprometerse a no cometer delitos o contravenciones.

Art. 7º – El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobada será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Art. 8º – El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y será dirigido por un Director Nacional, designado por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Art. 9º – El Director Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados tendrá las siguientes facultades:

- a) Llevar adelante las medidas de protección adecuadas a cada caso y a las posibilidades de adaptación a ellas por parte de las personas beneficiadas. A tales fines podrá requerir estudios psicológicos, clínicos, ambientales y todos aquellos que considere pertinentes;

b) Efectuar las comunicaciones relativas al seguimiento de cada caso a las autoridades que hubieran requerido la protección y determinar los distintos aspectos de la aplicación del programa;

c) Encomendar la ejecución material de las medidas especiales de protección a las fuerzas de seguridad, policiales y servicio penitenciario, quienes deberán cumplirlas en tiempo y forma, aportando servicios de custodia, informes técnicos o socioambientales y cualquier otro servicio que, por razones de inmediatez y reserva del caso, se lo estime necesario. A tal fin el responsable del área gubernamental respectiva deberá designar al funcionario encargado de las acciones señaladas en este inciso, en lo que a su competencia corresponda y disponer las medidas conducentes para afrontar los gastos que aquéllas demanden;

d) Requerir de los organismos o dependencias de la administración pública la intervención para suministrar servicios específicos, así como la confección de trámites y provisión de documentación e información. Los funcionarios responsables de los organismos y dependencias de la administración pública cumplirán en tiempo y forma con lo requerido, bajo apercibimiento de ser considerado el incumplimiento como falta grave;

e) Realizar pagos, contrataciones y erogaciones de carácter reservado para el cumplimiento de las medidas de protección;

f) Requerir al juez que dispuso la protección su cese cuando las circunstancias así lo aconsejaren;

g) Proponer la celebración de convenios y mantener relaciones a nivel nacional e internacional con organismos o instituciones públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, dando oportuna intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Los actos administrativos tendientes a llevar adelante el programa serán discrecionales, sin necesidad de sustanciación



previa. No será admisible recurso administrativo alguno contra dichos actos.

Art. 10. – Facúltase al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a dictar las resoluciones correspondientes a los fines de la adecuada y racional aplicación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO.

*Eduardo D. Rollano.*

#### ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 2.143 del Poder Ejecutivo de fecha 24-10-02.